

# **Movimiento pacifista: Una crisis que no es tal**

RAFAEL AJANGIZ

## **Una primera reflexión sobre el ser o no ser**

Oímos y leemos con frecuencia que el movimiento pacifista en nuestro país, si lo comparamos con sus homónimos europeos, se ha caracterizado por una aparición tardía y una crisis prematura. Se suele decir que llegó en los años ochenta y sucumbió pocos años después, tras el referéndum de la OTAN y que, aunque se reactivó tímidamente cuando la guerra del Golfo, al día de hoy, como de hecho ha sucedido en toda Europa, está prácticamente agotado. De hecho, casi nadie habla hoy del movimiento pacifista. Agua pasada.

Sin embargo, esta descripción no se ajusta a la realidad. Para empezar, en los setenta existió un movimiento pacifista/antinuclear que nada tuvo que envidiar a los iguales europeos. Ciertamente fue peculiar, el contexto era determinante, pero conseguimos parar alguna central nuclear y reconducir un plan energético que emulaba al francés, iniciamos muchas de las líneas de acción que siguen hoy activas -objeción fiscal, objeción de conciencia, educación para la paz, anti-OTAN- y, además, nos opusimos al Ejército, a la policía y a la violencia institucional, reclamamos y conseguimos una amnistía y hasta rehicimos ía democracia. En segundo lugar, las movilizaciones antinucleares de los últimos setenta o las movilizaciones anti-OTAN de los ochenta en modo alguno desmerecieron en capacidad de convocatoria a las del resto de Europa; todo lo contrario, fueron de las más grandes. Y en tercer lugar, a diferencia de los otros países, donde el movimiento ha tenido un perfil de actividad muy bajo durante los años noventa, aquí hemos conocido movilizaciones tan importantes como la insumisión o las habidas por la paz en el País Vasco. De hecho, contamos en la actualidad con el movimiento pacifista más activo de Europa.

Así pues, el movimiento pacifista esta hoy vivo y coleando. Debemos añadir que, en muchos sentidos, es mucho más maduro y eficaz que en sus supuestos años dorados.

Como veremos a continuación, hoy están activas numerosas movilizaciones y expresiones de carácter pacifista: educación para la paz, investigación sobre el gasto militar y el comercio de armamento, objeción e insumisión, protestas contra las intervenciones militares, la OTAN o las instalaciones militares, campañas por la transparencia en el comercio de armas o contra las pruebas nucleares, movilizaciones por la paz en relación con el conflicto vasco, etc. Muchas de estas iniciativas, además, no son secuelas del pasado sino que se han impulsado en los años noventa. Hay fundadas razones, por lo tanto, para desmentir la crisis estructural del movimiento pacifista.

Sería más apropiado hablar de una crisis nominativa. Todas esas expresiones en cualquier otro país europeo se etiquetan globalmente como peace movement. Aquí, sin embargo, tenemos problemas con el término. Los insumisos se refieren al movimiento antimilitarista, quienes protestan por las intervenciones militares hablan de un movimiento anti-guerra, también anti-OTAN, y quienes trabajan la educación para la

paz, el gasto militar o el comercio de armamento son centros, colectivos o redes de investigación para la paz; tan sólo se habla de movilizaciones por la paz y, ocasionalmente, de movimiento pacifista en relación con el llamado conflicto vasco. ¿Por qué? Podríamos decir que evitamos hablar de movimiento pacifista porque nos separan más cosas que las que nos unen, que no existe un mínimo común denominador suficiente, o que las distintas campañas y expresiones no se ensamblan suficientemente como para componer una unidad reconocible. Pero en eso no somos nada originales. Las mismas o muy parecidas distancias, diferencias y desuniones afectan por igual a todos los movimientos pacifistas europeos y nadie deja por ello de utilizar el mismo paraguas terminológico. Lo que no deja de ser una ventaja considerable, tanto en términos de auto-reconocimiento como de hetero-conocimiento: hacer hincapié en las claves comunes, que las hay y muchas, fortalece interna y externamente al movimiento. Dejemos aquí este primer apunte: recuperar el término sería un paso importante para fortalecer el movimiento.

Nuestro problema es que manejamos una definición taxativa del movimiento. Estamos acostumbrados a pensar en las movilizaciones contra la OTAN como el eje vertebrador del movimiento pacifista. O, dicho de otra forma, tendemos a concebir el movimiento como la unidad de acción y hasta organizativa que conocimos entonces. Muchos identifican movimiento pacifista con la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP); su invisibilidad sería la expresión de la crisis del movimiento. No nos confundamos: aquella unidad, referida a una movilización concreta, no pasó de ser coyuntural y en realidad bastante endeble. El movimiento llegó escindido al referéndum y en su seno siempre existieron desencuentros en cuestiones de concepto como la no-violencia, la desobediencia civil o la misma definición de militarismo y en términos de diseño organizativo. Recordemos también el protagonismo de los partidos políticos y sus intereses específicos.

Hoy no existe CEOP globalizante alguna y, sin embargo, el movimiento está más unido que nunca. En primer lugar, como todos aquellos ejes de división apenas tienen peso hoy en día, operamos de hecho en una mayor sintonía reflexiva y conceptual que entonces. En segundo lugar, los partidos políticos aceptan de buena gana el liderazgo de las organizaciones del movimiento y han desactivado sus organizaciones delegadas. En tercer lugar, la realidad actual, en forma de red flexible, permite liderazgos y movilizaciones que la unidad organizativa habría abortado casi con seguridad. En cuarto lugar, hoy caben expresiones de carácter instrumental -la abolición de la mili- y de carácter expresivo -la educación para la paz-, centradas en la política gubernamental -la oposición a las intervenciones militares- y en la acción de otros actores políticos -las movilizaciones por la paz en relación con el País Vasco-; es decir, existe más diversidad y espacios de encuentro. Y, en quinto lugar, si atendemos a los impactos sustantivos de la acción del movimiento, es obvio que, por poner un ejemplo, el fin del servicio militar obligatorio que ha sobrevenido a la insumisión es un logro de bastante mayor calado que lo que obtuvimos con la movilización en contra de la OTAN.

Nuestra valoración sería otra si dejáramos de valorar al movimiento pacifista en razón de criterios - instrumentalidad, capacidad de convocatoria, unidad formal, acción antigubernamental- que responden más bien a los parámetros clásicos de los partidos políticos que a los de un movimiento social contemporáneo. Y es que el movimiento pacifista de hoy responde a parámetros más propios e identitarios:

(a) ha ido reemplazando aquella cultura de la movilización -organización permanente mínima pensada para activar una movilización extensa cuando la coyuntura fuese favorable- por una cultura de movimiento -organización en red extensa con trabajo permanente en distintas áreas-;

(b) prefiere marcarse su propia agenda en torno a contenidos proactivos de largo alcance -la educación para la paz, el fin de la conscripción, la conversión de la producción de armamento- que activarse en reacción a la agenda gubernamental; y

(c) ha ganado autonomía e independencia en relación con los partidos políticos, lo que no puede decirse de otros muchos movimientos pacifistas europeos.

### **Educación para la paz**

La educación para la paz es uno de los ámbitos de trabajo más clásicos del movimiento pacifista. Los juegos cooperativos, la resolución no-violenta de los conflictos entre niños, las campañas contra el juguete bélico y sexista y las unidades didácticas sobre conflictos, guerras y desigualdad entre hemisferios dan fe de esa vocación de siempre. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una gran expansión del campo en tres sentidos:

(a) llega a mucha más gente e implica a muchos más educadores,

(b) ha incorporado contenidos anejos como los de inmigración y multiculturalidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible,

(c) se ha producido una verdadera eclosión de materiales y propuestas.

Esta expansión es consecuencia de la formalización é institucionalización de la educación para la paz en la LOGSE como una transversal en el área de las ciencias sociales bajo el título de «educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos». En general, aún a pesar de que su presencia en la práctica, al depender de la voluntad del claustro y de cada enseñante, es mucho menor de lo que sería deseable, este nuevo contexto de reconocimiento ha permitido una colaboración más intensa -en cierto modo también una cierta profesionalización- de algunos sectores del movimiento en los ámbitos formal e informal de la educación. En cierto modo, la experiencia de trabajo del movimiento pacifista en esta área le ha situado en una posición de cierto liderazgo, al menos en un sentido conceptual: las primeras definiciones, que se convierten en los marcos dominantes, han correspondido en buena medida al movimiento. El Colectivo No-violencia y Educación, el Seminario de Educación para la Paz (Sedupaz), la Fundació per la Pau, Justicia y Paz o el Movimiento de Objeción de Conciencia siguen siendo referencias importantes, pero tampoco podemos dejar de mencionar a la Asociación de Objetores de Conciencia, Bakeaz, el Centro de Investigación para la Paz, Intermón o los muchos seminarios de educación para la paz que pueblan nuestro país. Recientemente se ha creado además una red de recursos de educación para la paz a través de internet (Edualter) que nos proporciona una valiosa base de datos así como propuestas didácticas al uso. El resultado es una legitimación y promoción de los valores y discursos del movimiento pacifista en relación con las generaciones del futuro. Hasta qué punto calarán o no esos valores y discursos es algo que tendremos que evaluar en un futuro no muy lejano.

Con todo, el movimiento no está solo en este ámbito. La publicación de propuestas curriculares de tipo comercial supone en la práctica una multiplicidad de enfoques en competencia. Un caso extremo es la incursión del Ministerio de Defensa en el ámbito educativo. Recientemente, en el marco de la Directiva de Defensa Nacional 1/96, las autoridades gubernativas han intentado introducir contenidos militares en los centros educativos con el objetivo de promocionar la llamada «cultura de la Defensa» y, sobre todo, «sembrar la voluntad de prestar servicios en las Fuerzas Armadas». A medio y largo plazo, esta iniciativa pretende además deshacer el divorcio entre Fuerzas Armadas y sociedad que tanto debe a la acción del movimiento pacifista y que constituye el mayor obstáculo al diseño militar estratégico que ambiciona el gobierno. Vastos materiales, ofertas de charlas y conferencias a cargo de informadores militares, dossieres específicos para los tutores de enseñanzas medias, invitaciones a visitar acuartelamientos, presencia en ferias y convenciones dirigidas al público juvenil, cursos de formación en seguridad y defensa para profesores, estudios de postgrado, convenios con universidades para la creación de cátedras especiales sobre «paz, seguridad y defensa», contactos con editoriales de libros de texto, convocatoria de «premios Ejército» dirigidos a escolares, todo ello con un fuerte apoyo mediático, están llegando a más de 5.500 centros educativos con una insistencia dominante.

Esta línea de acción ha sido protestada formalmente por algunos partidos políticos, pero, sin duda, la acción más significada ha sido la propuesta de «escuelas objetoras». Esta propuesta, que consiste esencialmente en la adopción por parte del consejo escolar de una postura activa de rechazo a cualquier promoción de lo militar en el ámbito escolar, fue inicialmente promovida por la Fundació per la Pau de Barcelona y se ha extendido con celeridad a otras zonas del Estado, muy especialmente Madrid, País Valenciá, País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla-León. El Colectivo No-violencia y Educación, SOS Racismo, AOC, MOC, Paz Ahora, Entrepobles y Sodepaz, entre otros, han convocado plataformas contra la militarización de la enseñanza en cada una de estas zonas, contando con la participación activa de los sindicatos de enseñantes y asociaciones de padres y de alumnos. Con todo, estamos ante una lucha desigual en todos los sentidos: la educación para la paz tal como la define el movimiento pacifista es un pequeño David que debe luchar contra muchos Goliats, desde la intervención del Ministerio de Defensa hasta el desentendimiento, la pasividad y el conformismo de muchos profesionales de la enseñanza. Es mucho más fácil dar un folleto, visitar un acuartelamiento o invitar a un informador militar que pensar y desarrollar un curriculum de educación en los valores.

### **La intervención militar**

Las protestas contra las intervenciones militares y contra las instalaciones militares que las hacen posibles -las bases militares españolas son el soporte estratégico preferido para tal intervencionismo- es otra actividad de siempre del movimiento pacifista. Las marchas contra las bases de Rota, Morón o Torrejón o contra los campos de tiro de las Bardenas, el Teleno o el frustrado Anchuras han seguido organizándose con frecuencia intermitente a lo largo de los años noventa. Aunque su objetivo nominal es clausurar esas instalaciones -Anchuras es una referencia-, en la práctica estas marchas se han ritualizado como un indicador del rechazo a la política militar intervencionista. Por ejemplo, la marcha contra la base aeronaval de Rota ha obtenido sus mejores registros de participación en su segunda edición de 1986 tras la movilización contra la OTAN, en 1991 cuando la guerra del Golfo, y en 1996 coincidiendo con la entrada de España en la

estructura militar de la OTAN y la guerra de los Balcanes. Es importantísimo resistir y mantener la protesta pero la globalización que caracteriza a la reestructuración militar nacional e internacional actualmente en curso exige una acción pacifista coordinada que trascienda el ámbito local o regional. Por ejemplo, la expansión que está experimentando la base de Rota, como centro clave del nuevo diseño, debería motivar una movilización de ámbito estatal al menos. Sería interesante que esta coordinación se ampliase a marchas de nueva creación como la que se viene realizando al cuartel de Soietxe (Mungia, Bizkaia) desde 1994.

El fin de la guerra fría ha obligado a reformular toda la política de seguridad y defensa de los países europeos y ello abre nuevas oportunidades para el movimiento pacifista. Las autoridades se han visto obligadas a reconocer que no existe ya ninguna amenaza real a la integridad territorial y están a la busca de nuevas coartadas para sus ejércitos. Una de ellas es identificar inseguridad con incertidumbre, con la posible existencia de riesgos imprevisibles. Otra, indudablemente más honesta, es la defensa del llamado interés nacional. Ambas forman parte del Nuevo Concepto Estratégico de la Afianza Atlántica, aprobado inmediatamente después de la guerra del Golfo. Tal concepto autoriza a los países miembros, individual o colectivamente, a intervenir militarmente, sin límite geográfico alguno, allá donde ese interés nacional se vea cuestionado por cualquier otro país. Es una idea tan vieja como los Estados, quienes en cuestiones de política militar y exterior siempre han impuesto la razón de Estado sobre la razón democrática. Lo que debería hacernos reflexionar es que ahora expresan abiertamente, sin tapujos, lo que hace unos años tenían que callar porque no eran esos los marcos interpretativos dominantes. No todo es miel sobre hojuelas, sin embargo. Cuando parecía que el interés nacional iba a ser el único principio rector de la política militar, la iniciativa ciudadana y la opinión pública consiguieron reformular en parte esas operaciones fuera de área e incluir las misiones de ayuda humanitaria y de establecimiento de la paz. El resultado ha sido un término medio bastante ambiguo: las intervenciones militares que han dominado en los noventa no son intervenciones regidas por el puro interés nacional ni tampoco son verdaderamente humanitarias o eficaces en restablecer la paz.

La respuesta del movimiento pacifista a la intervención militar en el Golfo no fue problemática. Respondía a los parámetros clásicos: imperialismo, intereses económicos, liderazgo de los yanquis. Además, el gobierno español cometió la torpeza de enviar soldados forzosos, un exceso intolerable para un servicio militar obligatorio en crisis abierta de legitimidad. La respuesta no se hizo esperar y pronto se organizaron manifestaciones y desobediencias. Sin embargo, esta vez la movilización se formuló de manera distinta a la de la campaña contra la permanencia de la OTAN cinco años atrás. No era una movilización organizada estatalmente sino más bien una pluralidad de iniciativas separadas con mensajes variados y plurales; sin embargo, convergían, se percibían globalmente como una unidad. Los insumisos y sus desertores, los padres y madres de los soldados enviados al conflicto, un velero en misión de paz, el semanal "Diario de la Paz", las jornadas de debate, una plataforma de mujeres contra la guerra, las protestas frente a las bases en las que se aprovisionaban los B-52 americanos, etc. fueron animando la participación y al final se consiguieron organizar grandes manifestaciones al estilo más clásico, con participación intensa de los sindicatos mayoritarios y de algunos partidos políticos. No se reeditó la CEOP pero tampoco hizo falta.

Cuando se ejecutó la intervención pasó como en 1986, las grandes manifestaciones se deshicieron rápidamente. Pero, al igual que entonces, dos fueron las consecuencias en el seno del movimiento: (a) formación de nuevos grupos -podríamos decir que el movimiento se vertebró organizativamente a renglón seguido de las grandes movilizaciones; las fechas de nacimiento de los grupos en activo avalan esta idea- e (b) invitación a analizar lo sucedido y a actuar en consecuencia: para que no volviera a suceder otra guerra como aquella era necesario limitar y controlar la producción y exportación de armamento, desmilitarizar las políticas de seguridad internacional, prever y regular los conflictos, satisfacer las necesidades humanas básicas, implementar políticas energéticas ecológicamente sostenibles, pensar globalmente, fomentar una cultura de paz.

Este análisis llegó de mano de las organizaciones estables del movimiento, éstas que siempre están ahí, aunque no haya movilización, que trabajan tanto en las coyunturas favorables como en las desfavorables, que funcionan como la red necesaria para conectar las distintas iniciativas. Esta constancia es lo que les permite mantenerse activas cuando los acontecimientos son más complejos de interpretar, como en el caso de la guerra de los Balcanes, en la que se cambiaron los papeles: el agresor no era ahora el yanqui imperialista sino los herederos de un régimen que había sido una referencia inevitable de la izquierda europea. Así que, esta vez, callaron los grandes sindicatos y partidos políticos que habían participado en la campaña de la OTAN o en la crisis del Golfo y tan sólo algunos de sus militantes entraron a formar parte, a título individual, de iniciativas de solidaridad y denuncia que lideraron las organizaciones base del movimiento pacifista. Esas iniciativas, el caso de SOS-Balcanes, la Plataforma por la Paz en los Balcanes o Gerrarik Ez, no consiguieron convocar a las grandes masas de anteriores convocatorias pero tuvieron dos puntos a su favor: (a) consiguieron reunir a gentes de procedencias muy diversas, incluso políticamente enfrentadas, y (b) combinaron acción y reflexión, denuncia y apoyo a los grupos pacifistas de la ex Yugoslavia. Un estilo distinto.

Esta implicación supuso para el movimiento embarcarse en un intenso e incluso doloroso debate sobre los nuevos parámetros de la intervención militar y de la acción pacifista. Existían puntos de acuerdo como la necesidad de prevenir los conflictos actuando sobre sus causas estructurales, de lanzar alertas previas, de contrainformar y dar voz a los que sufren el conflicto, de apoyar al movimiento pacifista y a la sociedad civil de esos países, de denunciar los intereses y negocios de armamento de los países interventores, etc. Pero las masacres de Zepa o Srebrenica, lo imparables del genocidio, la visión de los campos de concentración, las cifras de exiliados y desplazados, movilizaron a la opinión pública y empujaron al propio movimiento pacifista a una acción más inmediata. Había que hacer algo más. La acción pacifista se enfrentó a sus límites y llegaron las tensiones y los desencuentros, que no fueron tanto entre los grupos pacifistas como en el seno de cada grupo pacifista. Unos defendieron el principio de no injerencia, otros optaron por organizar convoyes de ayuda humanitaria y hubo también quien reclamó el derecho de autodefensa armada de los bosnios e incluso una intervención militar externa. El movimiento vivió intensamente esa nueva realidad. No es casualidad que las únicas voces críticas a ese paseo legitimador de las fuerzas armadas que intentó el Gobierno español llegaran desde el movimiento pacifista. Había vida en el movimiento.

Luego llegó la realidad de la intervención multinacional, el cierre en falso de la paz de Dayton de 1996 y todas las secuelas que observamos hoy. Una realidad que ha contribuido sensiblemente a dilucidar aquellos dilemas. Esa Paz consolidó a los líderes de la agresión y, en definitiva, las fronteras ganadas en la guerra. Nunca se recuperó la situación anterior y la llamada comunidad internacional siguió haciendo caso omiso de las llamadas de alerta sobre la situación en Kosovo. De ahí que cuando decidió la intervención en esta zona, la postura del movimiento pacifista se presentara sin fisuras: ni OTAN ni Milosevic, contra los bombardeos de la OTAN, contra la limpieza étnica en Kosovo, contra la participación del Estado español en la guerra, derecho del pueblo kosovar a elegir libremente su futuro.

Estos mensajes han dado pie a algunas manifestaciones, informes, debates y apoyo a los desertores del conflicto de los Balcanes. Al día de hoy, el movimiento sigue denunciando las agresiones y la espiral de la guerra, lo ha hecho con Timor, lo está haciendo con Chechenia. Da igual quién intervenga, para el movimiento está muy claro que las intervenciones militares no son ninguna solución, que la OTAN es una alianza militar y no un gobierno mundial ni un instrumento de paz o de defensa de los derechos humanos, que la opción de la violencia es un fracaso de todos, de la política internacional, de los gobiernos, de las sociedades y del propio movimiento pacifista, que existen otras formas de acción, resolución y regulación de los conflictos como la negociación y la mediación, el apoyo a los que trabajan por la paz desde el conflicto - Mujeres de Negro sería un buen ejemplo-, la acción noviolenta.

En el fondo, el debate sobre las intervenciones justas y necesarias se ha revelado fútil, banal. Al entrar a valorar los criterios racionales de toda intervención militar -que haya una causa justa, que sea recta la intención, que la autoridad sea legítima, que sea el último recurso, que existan posibilidades de éxito, que los daños a la población civil no sean desproporcionados y que el balance final sea positivo-, hemos internalizado la lógica militar y olvidado que la destrucción de un ejército moderno requiere la destrucción de su sociedad, que no hay guerras justas ni guerras limpias. Ahora nos estamos dando cuenta de ello. No tenemos todavía respuestas a los interrogantes que nos ha planteado la intervención por razones humanitarias y de restablecimiento de la paz, nadie las tiene en el movimiento pacifista internacional, pero estamos aprendiendo a distinguir que la intervención militar no funciona, no sirve. Hasta la recién laureada con el Nobel de la Paz, Médicos sin Fronteras, está instando hoy a distinguir claramente entre la intervención militar y la intervención civil. Es decir, las mismas ONGs que presionaron para que hubiera una intervención militar en Bosnia y otros lugares codifican hoy sus propias actuaciones y apuestan hoy por un enfoque alternativo que denominan «políticas de paz participativas».<sup>[1]</sup> Esta comprensión ayuda a relativizar la utilidad de iniciativas como la creación de una fuerza militar voluntaria en el marco de Naciones Unidas cuya razonabilidad descansaría en que evitaría la consolidación de un ejército europeo o atlántico asociado a los intereses de sus miembros más poderosos.

Cierto es, por consiguiente, que el movimiento pacifista no ha sabido resolver el nudo gordiano de qué hacer ante una agresión bélica a manos de quienes detentan el poder, casi siempre las autoridades legales, contra su propio pueblo. También que las movilizaciones no han alcanzado el calibre de las que hubo en 1986 o enero de 1991, pero se han dicho y hecho cosas y se han hecho desde la sinceridad. Y todo ello en algo habrá ayudado al cambio que está empezando a operarse en el ámbito de la opinión pública. En una primera instancia, la sociedad obligó a ampliar el nuevo concepto

estratégico de la OTAN con la incorporación privilegiada de las misiones de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz, unas misiones que los países miembros de la OTAN no contemplaban en un principio. Fue la sociedad civil quien comenzó a organizar misiones humanitarias, quien presionó a los organismos de seguridad internacional a enviar observadores y tropas a esos conflictos y quien, en buena medida, ha determinado las pautas y modos de esas intervenciones.

Sin embargo, lo que en un principio podría calificarse como una especie de encantamiento y acercamiento entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas está hoy empezando a deshacerse. Si bien en la guerra de Bosnia la sociedad redescubrió a las Fuerzas Armadas como un instrumento que podía emplearse en misiones y labores más cercanas a sus valores y prioridades, como la paz y los derechos humanos, las contradicciones que han atenazado a las autoridades políticas y militares, preocupadas como estaban de no sufrir bajas y de rentabilizar la intervención en términos de credibilidad y legitimidad de las Fuerzas Armadas por encima de la efectividad en el cumplimiento de la misión, están devolviendo las cosas a la situación previa de desapego hacia la institución militar. La intervención en Kosovo no cuenta ya con la bendición de la opinión pública, sobre todo en esta Europa meridional. Como si se hubiera dado cuenta de que, en el fondo, la intervención militar por razones de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz ni es ni podrá ser nunca eficaz porque quienes deciden su implementación no creen en ella.

El movimiento pacifista puede y debe jugar un papel importante en este escenario. Su crítica y su discurso son importantes para una opinión pública que es más poderosa de lo que a primera vista podía parecer y que no se instala en la complacencia que pretenden los gobernantes. La denuncia y la acción es imprescindible para maximizar su influencia en un momento de cambio y de reformulación de las misiones de los ejércitos y de su papel en la política. Los ejércitos no disfrutaban ya de una legitimidad tradicional, determinada por su consustancialidad con el Estado, sino de una legitimidad funcional, es decir, tienen valor en función de su eficacia para con los objetivos que la sociedad les asigna. Que no sirvan para resolver los conflictos y traer la paz es, en términos democráticos, una puerta abierta a su progresivo debilitamiento, cuando no su desaparición. La labor del movimiento pacifista es hacer valer ese criterio de legitimación democrática. En este sentido, sería de gran ayuda una propuesta elaborada de alternativas a la intervención militar y, en general, una reflexión globalizadora sobre el hecho mismo de la intervención, sea civil o militar. En este sentido, propuestas como las de Brigadas de Paz merecerían ser estudiadas y quizá generalizadas a otros contextos prebélicos. Nos consta que se están trabajando.

### **Gasto militar y comercio de armamento**

El gasto militar y la producción y comercio de armamento es otro clásico del movimiento pacifista. A lo largo de todos estos años, el movimiento ha estudiado con detalle todo lo relacionado con el gasto militar -ahí están los informes anuales que conocemos todos- y ha seguido de cerca las evoluciones de la industria militar, su producción, ventas y exportaciones, compras e importaciones, los programas de Defensa en general y hasta las fusiones y conexiones entre empresas del ramo. Un trabajo técnico, especializado, que se enmarca adecuadamente en las imprescindibles referencias y comparaciones con los índices de gasto social, exclusión y pobreza. La Cátedra UNESCO para la Paz y el Desarrollo, la campaña C<sub>3</sub>A, los colectivos Gasteizkoak y



Tritón son referencias inevitables al respecto. Gracias a ellos sabemos que España está ascendiendo puestos en el «ranking» mundial de exportadores de armas y que en 1997 se ha llegado a situar en el quinto lugar después de EEUU, Rusia, Gran Bretaña y Francia, por delante incluso de Alemania y China. Algunos de estos informes han comenzado a hacerse un sitio en los medios de comunicación.

Este trabajo de información se complementa con otras líneas de acción que, por ahora, no han logrado desarrollarse en toda su potencialidad. Nos referimos a las marchas a las empresas de armamento que se han organizado periódicamente en el País Vasco y también a las propuestas y conversaciones con sindicatos en relación con la conversión hacia la producción civil. La salida de la crisis que vivía el sector ha enfriado la disposición de esos interlocutores y la asistencia a esas marchas ha ido decreciendo con el tiempo. Quizá la iniciativa más renombrada en este campo ha sido la campaña por la transparencia en el comercio de armas que, bajo el título de «secretos que matan», iniciaron en 1995 Greenpeace, Intermón, Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional, con la colaboración del centro UNESCO de Barcelona y el Centro de Investigaciones para la Paz.

El principio de esta campaña es oportuno. Sabiendo como sabemos, siempre demasiado tarde, que quienes compran esas armas las utilizan en campañas muy concretas de agresión y represión, conocer qué se exporta y a quién sería el primer paso para deslegitimar esas ventas y hasta evitarlas a tiempo; en definitiva, para controlar a los «vendedores de muerte» y sus conexiones gubernamentales. El secreto es su mejor carta de presentación y fuente de beneficios. Formalmente, el objetivo de la campaña es que España cumpla con el Código de Conducta al respecto que aprobó la Unión Europea en mayo de 1998 y que establece, entre otros, los siguientes criterios para aprobar una venta: que el país receptor no esté sujeto a un embargo internacional, respete los derechos humanos, no existan tensiones o conflictos internos en los que se puedan utilizar esas armas, ni riesgo de desestabilización regional, ni existan posibilidades de desvío a un tercer país, ni sea excesivo el peso de los gastos militares.

Obviamente, ningún país vendedor cumple estos criterios, de ahí que la verdadera finalidad de esta campaña sea enfrentar a la opinión pública con el hecho en sí, destapar esa información para que la sociedad sea quien convalide o no su legitimidad. Esta campaña se ha enfrentado a unos férreos intereses del complejo militar-industrial-gubernamental y sus resultados no han sido, como era de esperar, una mucha mayor transparencia al respecto, pero sí una mayor sensibilización de la opinión pública. Esta es una carrera de fondo que exige perseverancia y que puede ir arrojando algunos resultados a medio y largo plazo como, por ejemplo, el que se obtuvo en relación con las minas antipersonales.

Otra propuesta de acción que se viene practicando desde hace ya bastantes años es la objeción fiscal a los gastos militares. Sus objetivos son dos: (a) concienciar a la sociedad, e (b) invertir el dinero desviado del gasto militar en proyectos que impulsen una transformación desmilitarizadora. Inicialmente se proponía detraer de la cuota líquida de la declaración de la renta el porcentaje que se dedica a los gastos militares, pero la evolución estructural de la propia declaración y la voluntad de extender esta protesta han aconsejado recomendar con carácter general una cantidad fija, por ejemplo diez mil pesetas. Con ello, la Asamblea de Objeción Fiscal suele reunir en torno a unos 10 millones al año para los proyectos elegidos. Además, en los últimos años esta Asamblea

está proponiendo a las ONGs de ámbito social y de cooperación y desarrollo que animen a sus donantes a alegar como objeción fiscal todas las cantidades que aportan para sus proyectos, de esa forma se incentiva la conciencia pacifista y se hace visible la vinculación entre gasto militar y gasto social. El resultado habitual suele ser una combinación de ambas prácticas: se suele justificar como objeción fiscal esa cantidad fija para un proyecto explícito más el cómputo de todas las cantidades donadas a proyectos de ONGs. Con todo, a pesar de sus evidentes méritos, no podemos dejar de reconocer que la objeción fiscal no consigue despegar como desobediencia civil o convertirse en un desafío real a las prioridades presupuestarias. Hoy por hoy, no pasa de ser un valioso gesto simbólico, cuya conversión en una iniciativa de impacto sustantivo podría pasar por la implicación de algunas instituciones en esta iniciativa, al estilo de lo que está consiguiendo la campaña del 0,7%.

Ese sector de gentes de bien que trabajan y colaboran con las ONGs, sobre todo las que se ocupan del desarrollo de otros pueblos, es el aliado natural del movimiento pacifista en esta materia. Las ONGDs han ido adoptando una postura gradualmente más crítica en relación con las políticas gubernamentales de cooperación y desarrollo, introduciendo además referencias al gasto militar y al comercio de armamento. Razones no faltan. En 1994, la Ayuda Oficial al Desarrollo constituía el 0,26% del PIB y la mitad se correspondía además con créditos FAD, es decir, créditos a devolver con un marcado carácter comercial; estaba pensada como un instrumento de la política comercial española para beneficiar a las empresas propias. Ese año, la CONGDE propuso que esa ayuda se rigiese por los siguientes criterios: (a) lucha contra la pobreza y sus causas estructurales, (b) desconexión de los intereses comerciales, (c) democracia, participación y respeto de los derechos humanos, del papel de la mujer y del desarrollo sostenible; (d) descentralización y (e) sensibilización de la opinión pública. Estos fueron también los ejes discursivos de las movilizaciones del 0,7% que comenzaron unos meses más tarde y obtuvieron una buena cobertura informativa. Al final, consiguieron comprometer al gobierno socialista a un aumento progresivo del porcentaje en tres tramos, 0,35%, 0,5% y 0,7%, y a la creación del Consejo de Cooperación al Desarrollo, de carácter consultivo.

Todos sabemos en qué quedaron aquellos compromisos y cómo hoy en día se sigue demandando más o menos lo mismo que entonces. Ha mediado un cambio de gobierno, pero deberíamos también reflexionar sobre las posibilidades reales que tienen las organizaciones ajenas a la esfera de la política formal de controlar en la práctica el cumplimiento de esos compromisos, una vez que han cesado en su movilización. Cualquier campaña desde el movimiento pacifista o desde la sociedad civil debe proveerse de medios de presión suficientes y sostenidos. En la práctica, el gobierno popular ha conseguido incrementar el porcentaje a costa de computar, entre otras cosas, las operaciones de mantenimiento de la paz. Quizá por esta razón, porque se siguen utilizando los créditos FAD para vender armamento español o porque las deudas que condona el gobierno suelen estar relacionadas con la compra de ese armamento, la CONGDE está progresivamente haciendo uso de un discurso explícitamente pacifista y antiarmamentista. En la actualidad esta coordinadora se está planteando una campaña de denuncia de los gastos militares y del comercio de armamento bajo el título de «dividendo de paz».<sup>[2]</sup>

La mayor sensibilización de este importante sector, unida al saber y bien hacer del movimiento pacifista y a una opinión pública que siempre ha compartido la propuesta

de «gastos militares para gastos sociales», puede convertirse en una línea de acción conjunta de gran impacto, sobre todo en la coyuntura actual, dominada por un importante esfuerzo en torno a la tan sonada «profesionalización» de las Fuerzas Armadas. Esta «profesionalización», en realidad un cambio estructural a contrapie que deriva de la abolición forzada del servicio militar obligatorio, exige un incremento notable del gasto militar en dos sentidos: (a) compra y modernización del equipamiento, y (b) contratación de soldados de empleo.<sup>[3]</sup> De momento, el Gobierno está recolocando parte del gasto en partidas de otros ministerios y revalorizando el presupuesto de Defensa al mismo nivel que el gasto público, pero va a ser insuficiente. Además, como reconocen los técnicos del propio ministerio, existe una relación inversa, de sustitución, entre el gasto social y el gasto militar, es decir, que un incremento en el gasto social revertiría en una disminución del gasto militar y viceversa. Una decidida actuación conjunta del movimiento pacifista y de una buena parte de las ONGs reclamando un aumento del gasto social a costa del gasto militar podría dar al traste con la revalorización de la potencia militar -y, por consiguiente, de las soluciones militares o de fuerza- que este gobierno está intentando consolidar para mejorar su posición de poder en el escenario mundial.

La idea de seguridad humana que propusiera Naciones Unidas en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 puede ser un buen marco conceptual para oponerse a la defensa del interés nacional que propugnan nuestros gobernantes. Una seguridad humana como preocupación universal, como el conjunto de amenazas que son comunes a toda la gente, el desempleo, el narcotráfico, las agresiones, las carencias sanitarias o alimentarias, la contaminación o las violaciones de los Derechos Humanos, centrada en el ser humano y que se preocupe por la forma en que la gente vive en una sociedad, la libertad con la que puede ejercer diversas opciones, su grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y el hecho de que pueda vivir en paz. Solidaridad intranacional -por ejemplo, el salario social como derecho ciudadano- y solidaridad internacional. Esta seguridad humana es precisamente el objeto de la alternativa a la defensa militar que el movimiento pacifista ha propuesto desde siempre y que ha dado a conocer como Defensa Popular No-violenta: defender los logros y derechos sociales, políticos y económicos que ha conseguido la Humanidad a lo largo de su desarrollo histórico y hacerlo desde la participación popular, desde la base de la sociedad.

### **Insumisión y objeción de conciencia**

Posiblemente, la campaña pacifista más significativa de esta década, por su duración, dimensiones y resultados, ha sido la insumisión. Comenzó a finales de 1988 y durante estos once años ha congregado a unos 20.000 insumisos.<sup>[4]</sup> Sus consecuencias han sido la deslegitimación e inoperatividad de la prestación sustitutoria en una primera instancia, el gran crecimiento de la objeción de conciencia a renglón seguido y la abolición del servicio militar obligatorio como punto final. En ningún otro país se ha organizado nunca una campaña así. Es, sin lugar a dudas, una experiencia singular.

Sus inicios no estuvieron exentos de cierta polémica en el seno del movimiento pacifista. La historia comenzó cuando en octubre de 1987 el Tribunal Constitucional sancionó, no sin polémica, la constitucionalidad de la Ley de Objeción de Conciencia que de siempre había sido contestada por el movimiento pacifista. El gobierno quiso aplicar entonces una política de borrón y cuenta nueva para empezar de cero y evitar la desobediencia de los objetores históricos, teóricamente más movilizados que los de la

última hornada; anunció una amnistía para los primeros y comenzó a denegar la colectiva a los segundos. La respuesta del Movimiento de Objeción de Conciencia fue una llamada a la desobediencia civil: renunciar al reconocimiento formal como objetores de conciencia y hacer insumisión directamente al servicio militar. El objetivo no era ya mejorar la legislación sobre objeción de conciencia sino abolir directamente la conscripción. Esta decisión no fue compartida inicialmente por los otros grupos de objetores: unos pensaban que la desobediencia civil era un camino seguro hacia la marginalidad y la incompreensión social y que debían implementarse estrategias más graduales como la generalización de la objeción de conciencia a través de una aceptación crítica de la prestación sustitutoria; otros eran partidarios de esperar a la puesta en marcha de la prestación sustitutoria y hacer entonces insumisión.

Con todo, la insumisión consiguió arrancar en 1989 y fue un acierto. En primer lugar, porque la desobediencia se hizo realidad antes incluso de la puesta en marcha de la prestación sustitutoria; en un contexto de insumisos encarcelados, esa prestación sustitutoria nació sesgada por su carácter punitivo, represivo, respecto de estos desobedientes. En segundo lugar, porque la dramatización era perfecta: eran los militares quienes metían a los insumisos en la cárcel; nada mejor para trasladar a la sociedad un mensaje antimilitarista. Y en tercer lugar, porque la demanda planteada, la abolición de la conscripción, tenía mucha más fuerza narrativa y apoyo social que la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia; era algo que atañía a todos y no a unos pocos y exóticos objetores. El resultado fue una atención mediática desconocida hasta el momento y la adhesión y apoyo de un amplio abanico social y político.

La desobediencia ha persistido durante años y en ello radica la clave de su éxito, en acotar la capacidad de maniobra de los gobernantes, imposibilitar otras salidas no deseadas. Esa persistencia ha sido posible porque su diseño original atendía a todas las dimensiones del conflicto y porque el movimiento ha sabido maniobrar estratégicamente y hasta anticipar las respuestas de las autoridades. Ese diseño original contemplaba tres ejes de acción: (a) la solidaridad ante una represión que no se iba a eludir, (b) valerse de mediaciones políticas relevantes que trasladaran con exactitud sus demandas al ámbito de decisión de la política militar, y (c) bloquear el normal funcionamiento de la prestación sustitutoria.

La cárcel ha jugado un papel muy importante en esta movilización. Los insumisos no evitaban la cárcel sino que la buscaban, sabiendo que esa represión daba relevancia a su acto, deslegitimaba a las autoridades y, al mismo tiempo, reducía los costes personales y grupales de la represión. Así, el sistema de control formal se resintió seriamente ante la desobediencia. El Gobierno tuvo que aprobar una norma para desubicar la represión del marco militar y el sistema judicial ordinario se vio así abocado a una represión de carácter político que muchos jueces no quisieron secundar. También el sistema penitenciario se resintió cuando el movimiento decidió desobedecer la concesión automática del régimen abierto que había sido decidida precisamente para desdramatizar y silenciar el conflicto: problemas de espacio físico y un colectivo que reivindicaba mejores condiciones para todos los presos. Hubo que sacarlos de la cárcel. El nuevo Código Penal estableció una inhabilitación especial de 12 años, pero ello no fue sino un argumento más para exigir la despenalización total de la insumisión, lo que, obviamente, hubiera significado el fin de la mili. Al final, presionado por los acontecimientos, el gobierno comenzó a conceder indultos de oficio y redujo esa

inhabilitación de 4 a 6 años. Al día de hoy, los únicos insumisos en prisión -militar- son los insumisos en los cuarteles.

La desobediencia civil dio credibilidad a la propuesta de abolir la conscripción. Antes de la insumisión, CDS y PNV eran los únicos partidos que planteaban, de forma muy tímida, esta cuestión. En tan sólo siete años, todos los partidos han cambiado sus propuestas programáticas, incluso partidos de izquierda como Izquierda Unida o Herri Batasuna, que inicialmente se posicionaron en contra de la supresión del servicio militar obligatorio en virtud de sus convicciones ideológicas. Hoy en día nos resulta difícil creer que hace tan poco tiempo pensáramos en la mili como algo inevitable y hasta necesario.

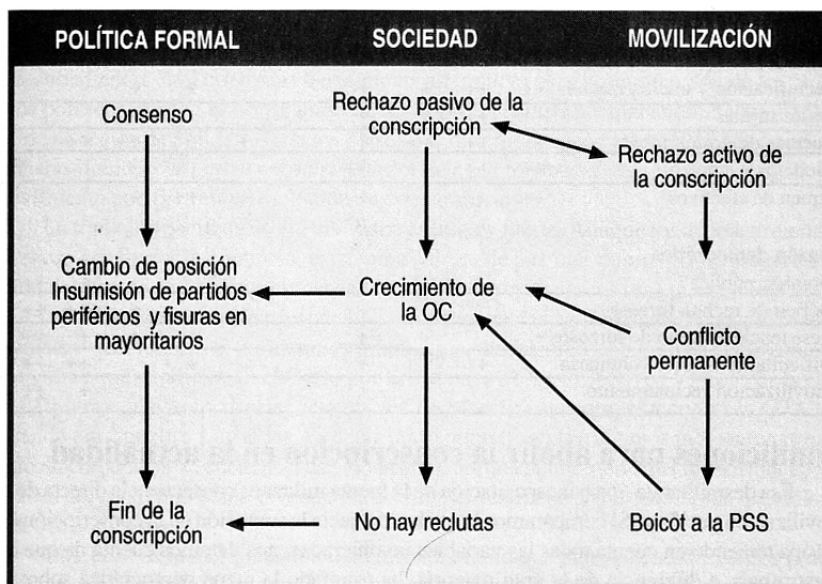
Ese cambio tan abrupto y acelerado fue posible porque el movimiento consiguió que, tirando de la solidaridad antirrepresiva, un amplio sector político y social secundara su propuesta de abolir la conscripción. Su iniciativa del «Manifiesto por la Abolición del Servicio Militar» funcionó de hecho como una especie de pacto político entre movimiento y partidos políticos que le permitió hacerse oír en el ámbito institucional: hemos contabilizado siete mociones presentadas al pleno del Parlamento español, otras siete en el vasco, tres en el catalán y dos en el Parlamento Europeo. Además, al menos en el contexto del País Vasco, facilitó la negativa de algunas instituciones a colaborar con el sistema de prestación sustitutoria e incluso con las funciones del reclutamiento - recordemos las polémicas declaraciones institucionales de los ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián-, una desobediencia institucional que se ha convertido en modelo precursor del actual planteamiento soberanista, de Eudima a Udaibiltza.<sup>[5]</sup>

Pero bloquear el normal funcionamiento de la prestación sustitutoria ha sido lo que al final ha disparado las cifras de objeción de conciencia e imposibilitado matemáticamente la continuidad del servicio militar obligatorio. La prestación sustitutoria está concebida como el principal mecanismo de contención de la objeción de conciencia en las sociedades contemporáneas y su principio básico es que sea más costosa que el servicio militar. Sin embargo, en nuestro país nunca gozó de la necesaria legitimación social. Sus comienzos fueron problemáticos porque las entidades se negaban a colaborar en solidaridad con los insumisos, quienes provenían en buena medida de ese mismo sector. Ello la convirtió en una iniciativa institucional, impulsada desde el poder, algo nunca visto en Europa. Tan sólo en Catalunya colaboraron entidades próximas al movimiento, en razón de los distintos planteamientos estratégicos de un sector del mismo. Sin embargo, con el paso de los años, ese sector empezó a impulsar posturas críticas como el plante o abandono de la prestación una vez igualada la duración del servicio militar y por fin, en 1997, tras exigir al gobierno un cambio en profundidad de la política de objeción de conciencia -fundamentalmente el abandono de la represión de los insumisos-, algunas entidades como Fundació per la Pau, Centre UNESCO de Catalunya, Medicus Mundi, Manos Unidas o Ingenieros sin Fronteras cancelaron sus convenios de colaboración.

El resultado de esta falta de legitimación y colaboración fue una incapacidad crónica en la oferta de puestos. En 1996, sólo uno de cada cinco objetores se había incorporado a la prestación sustitutoria y quienes lo habían hecho habían disfrutado de unas condiciones de cumplimiento notablemente más livianas que las del servicio militar. El meteórico aumento de la objeción de conciencia no ha sido sino la consecuencia lógica de un simple cálculo de costes y beneficios; la insumisión, el conflicto, ha abaratado la

objeción de conciencia. El gobierno nunca consiguió hacerse con el control de la situación. Hoy en día, en la recta final de la conscripción, se ha visto obligado a conceder todas las facilidades del mundo -igualar su duración con la del servicio militar, reconocer todo tipo de prestaciones previas, eximir a quienes han estado esperando demasiado tiempo, etc -para poder presentar unos números razonables a fin de ejercicio.

El conflicto se ha mantenido vivo e incontrolable gracias a la visión estratégica del movimiento. Autoinculpaciones, presentaciones periódicas de los desobedientes para forzar las detenciones, planteamiento político y colectivo en los juicios, negativa a la propuesta de los fiscales de pactar penas inferiores a un año, renuncia a la libertad condicional, plante o renuncia al régimen abierto en las prisiones, negativa a acogerse al nuevo Código Penal, ayuda humanitaria en Bosnia, insumisión en los cuarteles.<sup>[6]</sup> Una detrás de otra, siempre anticipándose. Su estilo de acción no-violenta, además, ha sido un ejemplo de economía y rentabilidad: con poca gente pero ideas muy originales y llamativas ha conseguido un espacio estable en los medios de comunicación y una fiel transcripción de su discurso y demandas. En la actualidad, el movimiento se está valiendo con eficacia de la comunicación electrónica: edita dos boletines electrónicos y sus páginas web, constantemente actualizadas, son ampliamente visitadas.



### Proceso de la abolición de la conscripción en España

La crisis definitiva del servicio militar llegó en 1994. Fue entonces cuando se reveló insuficiente el modelo de Fuerzas Armadas 2000 que habían pactado socialistas y populares en 1991. «El Ejército no tendrá suficientes reclutas a partir de 1997 debido al auge de la objeción», decían los medios de comunicación. La respuesta fue un plan especial de prestación sustitutoria que, obviamente, llegó demasiado tarde. Dos años después, el nuevo gobierno del PP anunciaba el fin de la mili obligatoria y se apresuraba a reclutar soldados de empleo para componer un ejército suficiente. Nada que ver con Francia. En el país vecino, la supresión de la mili ha sido el último paso de una transformación de años que ha convertido a Francia en la primera potencia militar europea. España, en cambio, ha perdido puestos en el escalafón y con sus 140.000 efectivos militares

actuales -el proyecto Fuerzas Armadas 2000 preveía 180.000 y el nuevo Modelo de Defensa del Pp, 170.000- se ha visto superada hasta por Grecia. Incluso ejércitos más pequeños, como el holandés o el belga, están mejor equipados y ocupan lugares estratégicos, de coordinación, en las nuevas fuerzas multinacionales. Un ejemplo, en números relativos al tamaño poblacional las fuerzas españolas de intervención rápida, eje central del nuevo diseño de la OTAN, sólo son superiores a las de Portugal.

Razón de Estado	Fra ++	RU ++	Hol +	Bel	Por Din	Ñor +	Ale +	Ita	Esp
Tecnificación y nuclearización				+					
Gasto militar	++	++	+	+	+	+	+		
Fuerzas de acción rápida	++	++	++	++	+	+	++	++	
Modelo de empleo	++	++	++	++	++				Vo
lumen de efectivos	++	+	+	+	+++	++	+		
Razón democrática									
Opinión pública	+		+	+				+	++
Déficit de recluta forzosa							+		++
Resistencia al envío de forzosos +			+	+			+	+	++
Dificultades recluta voluntaria		+		+		+		++	++
Movilización reclutamiento								+	++

### Condiciones para abolir la conscripción en la actualidad

Esa desmilitarización o incapacitación de la fuerza militar es consecuencia directa de la movilización pacifista. Si comparamos la evolución hacia la supresión de la conscripción en Europa teniendo en cuenta todas las variables involucradas, nos daremos cuenta de que en nuestro país, a diferencia de la gran mayoría, ha triunfado la razón democrática sobre la razón de Estado. Es decir, ha sido la sociedad la que ha impuesto una abolición que además está poniendo en peligro el futuro de las Fuerzas Armadas. El déficit actual de reclutas de empleo es la consecuencia natural del déficit anterior de reclutas forzosos y de la deslegitimación que padece la institución militar.<sup>[7]</sup> En Francia, Holanda o Alemania no existen problemas de reclutamiento; aquí se comienza a reclutar inmigrantes y se ha intensificado increíblemente la incorporación de las mujeres -una asignatura pendiente para el movimiento-. La coyuntura actual es inmejorable para la acción pacifista porque la crisis de las Fuerzas Armadas es descomunal. El movimiento pacifista tiene la palabra: la recuperación o empequeñecimiento de las fuerzas armadas dependerá en gran medida de que el movimiento se inhiba o, por el contrario, formule adecuadamente la demanda de una sociedad sin ejército.

### El conflicto del País Vasco

podríamos calificar la acción del movimiento pacifista en relación con el conflicto vasco como una búsqueda constante del equilibrio. Por ejemplo, para organizar una movilización pacifista exitosa en un contexto tan polarizado políticamente, es decir, que

llegue a toda la sociedad, el movimiento ha tenido siempre que moverse con especial cautela y acierto. La insumisión no habría tenido ni con mucho la misma relevancia si, por ejemplo, hubiera estado dominada por el MLNV. De ahí que las organizaciones más propias del movimiento se hayan visto obligadas a jugar en tierra de nadie, a buscar alianzas en uno y otro lado, a reunir consensos imposibles. Haciendo virtud de esa necesidad, el movimiento ha llegado más lejos y en todo momento ha sopesado el valor añadido que tenían sus propuestas de movilización para la resolución del conflicto vasco. Se ha esforzado en convocar gestos y contextos de encuentro y diálogo, en ofrecer a uno y otro bando la desobediencia civil como una herramienta alternativa para la consecución de los objetivos políticos. Y algo ha conseguido: la desobediencia institucional antes mencionada o el tipo de acción de Solidarios con los Presos o la reciente propuesta del MLNV de priorizar la desobediencia civil están para constatarlo. Está por reconocer el papel que ha jugado el movimiento pacifista en la resolución de este conflicto.

La tradición pacifista en el País Vasco es larga y fuerte. Aunque los acontecimientos parezcan confirmar lo contrario, existe una cultura de paz más desarrollada que en otras zonas del Estado. No es ninguna casualidad que los grupos vascos tengan tanta importancia en el movimiento pacifista estatal. Ni tampoco que las aquí llamadas organizaciones pacifistas -recordemos el problema terminológico- encuentren su origen en el movimiento pacifista más tradicional: el Gesto por la Paz nace de los Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme y Elkarri descende a su vez de Manifiesto -campana contra la OTAN-pasando por Eguzki y Lurralde. Es decir, aun a pesar de que en algunos momentos se han dado discrepancias, el encuentro ha sido posible porque comparten en el fondo conceptos básicos del pacifismo como el relativo a la violencia estructural o la resolución no-violenta de los conflictos.

Otra cosa es la manipulación del enfrentamiento que han pretendido los dos polos políticos del conflicto. Gesto por la Paz nace en Bilbao en 1985 como una concentración silenciosa de protesta por cada muerte que resulta de la violencia política. Sus formas organizativas y sus gentes son las típicas del movimiento pacifista. Sin embargo, debe su rápida extensión al resto del País Vasco al apoyo mediático e institucional que recibió cuando en 1988 expresó públicamente su apoyo al Pacto de Ajuria Enea. Por lo tanto, se ha movido siempre en una contradicción constante. Por un lado, organizaba actos públicos con notable presencia de líderes políticos del ámbito institucional y, por otro, aportaba reflexiones interesantes para el diálogo y la resolución del conflicto.

En 1992 nació Elkarri, su contraparte necesaria. También en este caso, el núcleo original corresponde a militantes cristianos, lo que deja constancia de la importancia de ese ámbito en la acción pacifista del País Vasco. Elkarri nace como crítica a la Coordinadora Gesto por la Paz pero también se distancia pronto del MLNV, de donde proviene en el fondo. De esta manera, se empiezan a construir más puntos intermedios. Elkarri ha buscado un protagonismo más técnico, de mediador, pero sin olvidar que su fuerza reside en su militancia, de ahí que potencie de hecho que cada uno de sus miembros se convierta en activista de la mediación y el diálogo. Su éxito más palpable es, posiblemente, la facilitación del acuerdo de Lizarra-Garazi. Pero, como no podía ser de otra manera, al final ambos colectivos han buscado el encuentro y llevan ya algunos años afinando propuestas conjuntas, hallando equilibrios imperfectos. Por ejemplo, la llamada de atención sobre la dispersión de los presos vascos o sobre la reparación de las



víctimas del conflicto como un paso imprescindible para cicatrizar las heridas. El valor de la Coordinadora Gesto por la Paz, de Elkarri y, en general, de los grupos del movimiento pacifista en su sentido más extenso -no olvidemos a Gernika Gogoratz, Bakea Orain, el KEM-MOC o Kakitzat- es ocupar lugares intermedios entre los polos del conflicto y ofrecer oportunidades de diálogo y acuerdo.

### **Para terminar**

El movimiento pacifista tiene mucho presente y también futuro, de eso no cabe duda. La actividad de todos estos años ha sido la mejor escuela de los futuros activistas y un gran bagaje de experiencia. Con todo, no vendría nada mal que se aprovecharan bien las oportunidades que se abren en el momento actual. Hemos mencionado algunas: el gasto militar, la propia existencia de las Fuerzas Armadas, las intervenciones militares. Todo lo que se haga en cualquiera de esas direcciones será una aportación válida. El desarrollo de toda política militar, aun con su apariencia de gran pedestal inaccesible, depende de la sociedad, de nuestro consentimiento. Cada negativa por nuestra parte repercute sobre todo el edificio porque afecta a su material de construcción, la legitimidad. La intervención militar, el gasto militar, el reclutamiento de empleo o la asunción de los contravalores militares y sus prácticas no se pueden independizar entre sí. En términos de legitimidad, todo son vasos comunicantes: una campaña en contra del gasto militar, además de sus efectos directos sobre las posibilidades presupuestarias del modelo militar de defensa, repercutirá indudablemente sobre ía capacidad de reclutamiento o la accesibilidad de los militares al medio escolar y abrirá si duda nuevos espacios y oportunidades para la acción pacifista. El objetivo último debe ser, por lo tanto, socavar esa legitimidad, ahondar en el divorcio entre la sociedad y las Fuerzas Armadas y todo lo que les concierne, sustituir la política militar por una cultura participativa de la paz.

Sin embargo, creemos que para afrontar ese futuro es necesario que el movimiento construya una mayor globalidad, que podría definirse en términos de una mejor coordinación estatal de los trabajos existentes en cada línea o ámbito de acción pacifista, mayor comunicación con movimientos de otros países, un reagrupamiento simbólico, virtual -no tiene por qué ser organizativo- de consensos y acciones, una apertura a otros grupos, organizaciones y movimientos nominalmente no pacifistas pero cuya convergencia es cada vez mayor, una aglomeración de los distintos ámbitos de trabajo y acción bajo grandes mensajes comunes que permita visualizar un movimiento pacifista unido, y mucho sentido común, es decir, recoger y amplificar las demandas y voluntad de paz y justicia social existentes en la sociedad. ¿Para cuándo quedamos?

---

### **Lecturas recomendadas**

Agirre, Xabier, Rafael Ajangiz, Pedro Ibarra y Rafael Sainz de Rozas, La insumisión, un singular ciclo histórico de desobediencia civil, Tecnos, Madrid, 1998.

Agirre, Xabier, Yugoslavia y los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1997.

Asamblea Feminista y otros, ed., «Gasto Militar y Alternativas Sociales (1997)», Un Análisis del Gasto Militar y las propuestas de los Movimientos Sociales, Colectivo Tritón, Madrid, 1998.

Bastida , Anna, Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para la paz, Icaria, Barcelona, 1994.

Bertrand, Maurice, La crisis del Ejército, Acento Editorial, Madrid, 1996.

Fisas, Vicens, Alternativas de defensa y cultura de paz, Fundamentos, Madrid, 1994.

Funes Rivas, M<sup>a</sup> Jesús, La salida del silencio. Movilizaciones por la paz en Euskadi 1986-1998, Akal, Madrid, 1998.

Gordillo, José Luis, La objeción de conciencia, Paidós, Barcelona, 1993.

Jares, Xesus, Educación para la paz. Su teoría y su práctica, Editorial Popular, Madrid, 1991.

Martín Beristain, Carlos, La insumisión encarcelada, Virus, Barcelona, 1992.

Plataforma contra la OTAN de Madrid, ed., Las viejas mentiras de la nueva OTAN, Editorial J. S., Madrid, 1997.

Sampedro , Víctor, Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997.

Consejo de Juventud de Euskadi, Segundo libro vasco de educación para la paz, Gobierno Vasco, Bilbao, 1999.

---

[1]La CONGDE aprobó en octubre de 1997 un código de conducta para sus actuaciones.

[2]Es interesante constatar que el tan nombrado «dividendo de paz» que todos esperábamos con el fin de la guerra fría se nos ha escapado sin darnos cuenta. El ahorro en gastos y presupuestos militares habido en los últimos diez años no se ha utilizado para aumentar el gasto social sino, básicamente, para reducir el déficit público y hacer posible la convergencia monetaria.

[3]El reclutamiento de este personal está atravesando serías dificultades que derivan, como no podía ser de otra forma, de la pobre legitimación social que disfrutaban las Fuerzas Armadas. La experiencia norteamericana al respecto, en los años setenta, establece que la única forma de comenzar a resolver esa crisis de reclutamiento es una subida sustancial de los sueldos de esos soldados y mantenerlos constantemente por encima de la oferta del mercado civil de trabajo.

[4]Bien mirado, no han sido tantos para el impacto que han tenido. Veinte mil en once años no llegan al 1% de los llamados a filas en ese periodo y representan el 2% del millón de objetores reconocidos.

[5]La celebración de fiestas de insumisos, como el Intsumiso Eguna, ha contribuido a reforzar esa desobediencia institucional.

**[6]La insumisión en los cuarteles, que se inició en marzo de 1997, es la actual campaña en marcha del Movimiento de Objeción de Conciencia: han sido 23 los insumisos que la han practicado en los últimos dos años. Consiste en incorporarse a filas para después desertar. Ha conseguido reeditar la confrontación directa con los militares, pues juicios y cárceles son militares. Además, las autoridades militares están ahora encausando a algunos activistas por sus acciones de protesta. Recientemente se han celebrado dos juicios militares por «ofensas a las Fuerzas Armadas».**

**[7]No es cierto que las intervenciones militares mejoraran estructuralmente la legitimación social de las Fuerzas Armadas españolas; fueron cambios coyunturales y, de hecho, ahora esa legitimación está en los valores más bajos de la década. La legitimación social de las Fuerzas Armadas no ha variado en los últimos veinte años.**

---

**Enlaces en la red:**

<http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/>

<http://www.pangea.oig/perlapau/>

<http://www.cip.fuhem.es/>

<http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/> <http://www.nodo50.org/pazahora/>

<http://www.kender.es/gesto/>